

ASAMBLEA ANUAL DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO*

I — EXPOSICION DEL PRESIDENTE DEL BANCO, SEÑOR ANTONIO ORTIZ MENA

Al comenzar hoy formalmente sus deliberaciones la XXII Reunión de la Asamblea de Gobernadores del Banco deseo expresar, en primer término, nuestro agradecimiento al pueblo y al gobierno de España y a las autoridades municipales de Madrid por la generosa hospitalidad que nos han dispensado.

El hecho de estar hoy reunidos en Madrid tiene, asimismo, el especial significado de constituir la primera oportunidad en que la Reunión Anual del Órgano Rector del Banco se celebra en Europa, ratificando así la vocación de cooperación transregional que inspira nuestro quehacer.

Saludo muy especialmente al señor gobernador por Suriname que participa por primera vez en las deliberaciones de esta asamblea. La reciente incorporación de Suriname al Banco fortalece nuestra integración cada vez mayor al mundo del Caribe y amplía el ámbito de la cooperación que venimos ofreciendo a los países de esta región. Creo oportuno mencionar también la feliz circunstancia del ingreso de Portugal, ocurrido a principios de 1980, a la gran familia de naciones iberoamericanas de nuestra institución, las que así como en el pasado, habrán de continuar en el futuro esa tarea de horizontes ilimitados que presenta el desarrollo de América Latina.

Actividades del Banco en 1980

La labor realizada por la institución en el ejercicio aparece explicada en el Informe Anual presentado por el Directorio Ejecutivo a la Asamblea, que he transmitido oportunamente a los señores gobernadores. Por ello, me limitaré en esta exposición a hacer algunas consideraciones de carácter general en torno a los logros alcanzados en 1980, relacionándolos según sea el caso con los resultados obtenidos en el año anterior, dada la estrecha vinculación programática que orienta la ejecución de ambos ejercicios, y a destacar los aspectos más importantes de la tarea realizada.

Durante el año el Banco cumplió con creces las metas operativas programadas en la Quinta Reposición de Recursos. Al concluirse en 1980 el primer bienio del ciclo de programación contemplado en la referida reposición, me complace confirmar que el valor agregado de los préstamos otorgados en los dos años ha superado en cerca de US\$ 500 millones los montos proyectados. En este contexto procede señalar también que la institución ha venido observando los lineamientos señalados por los Gobernadores de destinar la mitad de los recursos de sus operaciones crediticias al financiamiento de proyectos en beneficio de los estratos de población de menores ingresos, estimando-

se que alrededor de un 45% del monto de los préstamos otorgados en el bienio ha tenido el destino aludido.

En lo que respecta a la distribución sectorial de los préstamos otorgados durante dicho periodo, también se han venido observando los lineamientos programáticos señalados por los gobernadores.

Préstamos y desembolsos

En 1980 el Banco autorizó el volumen más alto de préstamos en su historia, con la aprobación de ochenta y ocho operaciones por un valor de US\$ 2.309 millones, cifra que representa un aumento de casi el 13% sobre el monto aprobado en 1979. De este total, US\$ 1.424 millones correspondieron a operaciones concedidas con los recursos de capital del Banco; US\$ 824 millones al Fondo para Operaciones Especiales, y US\$ 61 millones a otros fondos en administración.

La distribución sectorial de los préstamos otorgados en 1980 indica que un 27% de los créditos se destinó a la agricultura y la pesca; un 23% a la energía y otro 20% a transporte y comunicaciones. Siguen en orden de magnitud: un 16% a infraestructura social, incluyendo salud pública y ambiental, educación, ciencia y tecnología y desarrollo urbano; un 9% a industria, minería y turismo; y el 5% restante al financiamiento de preinversión, exportaciones y otros sectores. El monto acumulado de los préstamos concedidos hasta el 31 de diciembre de 1980 se elevaba a casi US\$ 18.000 millones, que ayudaban a financiar proyectos con un costo total superior a los US\$ 66.000 millones. Por lo tanto, dos tercios del costo total de los proyectos se financiaron con los recursos de los países latinoamericanos y recursos externos suministrados por otras fuentes.

En adición a estas operaciones, merece especial mención el programa de financiamiento para pequeños proyectos puesto en marcha en 1978. Este programa ya ha permitido otorgar ayuda crediticia en dieciséis países, por un total de US\$ 18,6 millones para el financiamiento de proyectos productivos iniciados por personas o agrupaciones que normalmente no tienen acceso a las fuentes convencionales de crédito público o comercial. En 1980, la Institución aprobó dieciocho de estas operaciones por un valor de US\$ 8,3 millones. Asimismo, en el curso del año se aprobaron cuatro nuevas inversiones de capital accionario, con cargo al programa financiado con recursos del Fondo de Fideicomiso de Venezuela, por valor de US\$ 1,6 millones.

* XII reunión celebrada en Madrid, España. Sección inaugural en el día 6 de abril de 1981.

Me complace informar por otra parte que, como resultado de la aplicación de la política adoptada por el Banco desde comienzos de la pasada década de conceder tratamiento preferencial a los países de menor desarrollo relativo y de mercado limitado de la región, estos países recibieron el 37% del total de los préstamos autorizados durante el ejercicio. Dichos países, se beneficiaron además con el 82% de los préstamos concesionales en divisas otorgados en 1980 con cargo al Fondo para Operaciones Especiales.

Cooperación técnica

Durante el ejercicio pasado el Banco comprometió US\$ 32,2 millones en el financiamiento de 108 proyectos de cooperación técnica sin requerimiento de reembolso o de recuperación contingente, con cargo a recursos provenientes de los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales y del Fondo Fiduciario de Progreso Social. Esta suma elevó el total acumulado de las autorizaciones a casi US\$ 300 millones de dólares. En lo que respecta a la cooperación técnica otorgada con carácter reembolsable destinada principalmente a estudios de preinversión o al establecimiento de fondos que llevan esa finalidad, el Banco aprobó un total de US\$ 43 millones en préstamos o como parte de préstamos, con lo cual el valor acumulado de estas operaciones llegó a US\$ 427 millones.

Los resultados del programa de cooperación técnica no reembolsable y de recuperación contingente cumplido en 1980 indican que más de la mitad de las operaciones se destinaron a los países de menor desarrollo relativo y que más de un tercio de las autorizaciones beneficiaron a proyectos de alcance regional o subregional. Otra característica en el desenvolvimiento del programa ha sido su vinculación cada vez más estrecha con las operaciones de préstamo, razón por la cual se ha incrementado la asignación de recursos a la preparación de proyectos y otros estudios de preinversión, como también a actividades de apoyo institucional a las entidades responsables de la ejecución de los préstamos. Cabe señalar asimismo, el continuado apoyo otorgado a los centros internacionales de investigación agrícola radicados en América Latina y a la puesta en marcha de nuevas iniciativas en las áreas de energía, desarrollo comunitario, empleo rural y salud que favorecen a los grupos de menores ingresos.

Desembolsos y amortizaciones

El monto de las sumas desembolsadas en 1980 con cargo a los préstamos autorizados llegó a un nivel sin precedentes de US\$ 1.432 millones, cifra superior a un 24% de la alcanzada en el año anterior. Al finalizar el ejercicio los desembolsos acumulados superaban los US\$ 10.500 millones, cantidad que representa el 59% del valor total de los préstamos otorgados por el Banco hasta entonces.

La distribución por fuentes de recursos de los desembolsos efectuados durante el año y los montos acumulados

correspondientes fueron: US\$ 813 millones con cargo a los recursos de capital por un total de US\$ 5.232 millones; US\$ 469 millones con cargo al Fondo para Operaciones Especiales por un total de US\$ 4.377 millones, y US\$ 150 millones con cargo a fondos en administración por un total de US\$ 936 millones.

Las amortizaciones de los préstamos totalizaron US\$ 482 millones durante el ejercicio, con lo cual el monto acumulado se elevó a US\$ 2.900 millones.

Cumplimiento de la Quinta Reposición de Recursos

En el mes de julio de 1980, entraron en vigencia las resoluciones aprobadas por los señores gobernadores para poner en efecto la Quinta Reposición de Recursos. Mediante tales resoluciones se incrementó en US\$ 8.000 millones el monto de los recursos de capital del Banco, y en US\$ 1.750 millones el total de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales.

En el caso de los Estados Unidos, existe un monto pendiente de US\$ 174 millones en suscripciones al capital correspondiente a la segunda cuota, lo cual ha provocado la necesidad de diferir la aceptación de partes de las suscripciones de capital de otros países miembros a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del Convenio Constitutivo del Banco, relativas al mantenimiento de poderes mínimos de votación. Los montos que han quedado así diferidos, son equivalentes a aproximadamente US\$ 179 millones.

Hemos recibido indicaciones del gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que se tomarán las medidas necesarias para solucionar los atrasos existentes en el cumplimiento de los aportes comprometidos. Las cantidades necesarias han sido incorporadas a la solicitud de presupuesto sometida al Congreso. Esperamos que tales medidas hagan posible que el Banco cuente, próximamente, con la suscripción y el pago completo de la segunda cuota del aumento de capital correspondiente a dicho país.

Quisiera además instar a las autoridades de los países a que agilicen las medidas necesarias para asegurar el pago de algunos aportes todavía pendientes correspondientes a las dos primeras cuotas y a que adopten, oportunamente, las acciones necesarias para la suscripción y pago de las restantes dos cuotas de esta reposición de recursos. Es necesario tener en cuenta que aún completándose los aportes correspondientes a la Quinta Reposición, la situación de recursos del Banco, hacia fines de 1982, no haría posible sustentar un programa operativo congruente con los requerimientos de la región en 1983 y los años siguientes.

Captación de recursos

En el curso del año, las actividades del Banco para obtener recursos mediante la venta de sus valores en los mercados internacionales de capital se vieron afectadas por las limitaciones prevalecientes en dichos mercados y por el elevado costo de los recursos. La ejecución del programa

financiero incluyó la colocación de empréstitos por un valor equivalente a US\$ 460 millones, de los cuales US\$ 373 millones correspondieron a emisiones de mediano y largo plazo con cargo al capital interregional y US\$ 87 millones a colocaciones de bonos en dólares a corto plazo en bancos centrales de países miembros.

De las emisiones a largo plazo, una por el equivalente a US\$ 86,7 millones fue colocada en Alemania; otra por US\$ 100 millones en los Estados Unidos; una por US\$ 30,8 millones en los Países Bajos y tres por un total de US\$ 155 millones en Suiza. En cuanto a las dos emisiones a corto plazo, una por US\$ 49,7 millones fue colocada en bancos centrales y otros organismos oficiales de dieciséis países miembros en América Latina, y la otra por US\$ 37,5 millones en entidades similares de once países miembros extrarregionales.

Los empréstitos vigentes al finalizar el ejercicio, representaban obligaciones financieras por un valor de US\$ 3.000 millones, de las cuales US\$ 2.200 millones correspondían al capital ordinario y US\$ 800 millones al capital interregional.

Mediante la utilización del mecanismo iniciado en 1976 para obtener recursos adicionales en los mercados privados de capital destinados a la ejecución de proyectos, el Banco concertó durante el año tres financiamientos complementarios por un valor de US\$ 50 millones con lo cual el total de estas operaciones se elevó a más de US\$ 400 millones.

Finalmente, procede señalar que durante el año el Banco suscribió con el gobierno de Suiza un acuerdo que establece un fondo especial integrado inicialmente con cinco millones de francos suizos. Los recursos de este Fondo Suizo de Cooperación Técnica y Pequeños Proyectos, se otorgarán en los mismos términos concesionales que rigen para los financiamientos del Fondo para Operaciones Especiales y se destinarán a apoyar proyectos que contribuyan a elevar las condiciones de vida y la productividad de los sectores de menores ingresos en los países de la región.

Ejercicio financiero y administrativo

Los ingresos brutos derivados de las operaciones realizadas por el Banco en 1980 con cargo a sus recursos de capital ordinario e interregional y al Fondo para Operaciones Especiales sumaron US\$ 619 millones, y los ingresos netos alcanzaron un valor de US\$ 257 millones. Esta última cantidad elevó las reservas totales del Banco al finalizar el año a cerca de US\$ 1.500 millones. Si consideramos que los desembolsos totales de los préstamos otorgados por el Banco superaron los US\$ 10.000 millones al fin del período, la proporción entre reservas constituidas y desembolsos es verdaderamente excepcional.

En 1980 las actividades operativas del Banco registraron una significativa expansión, a pesar de lo cual la ejecución del programa pudo cumplirse satisfactoriamente con solo un ligero incremento en términos reales del presu-

puesto administrativo que incluyó, por primera vez en los últimos cinco años, la autorización para aumentar en cuarenta y cinco plazas, es decir en menos del tres por ciento, el plantel del personal. Dicho aumento fue destinado a las unidades operativas. No obstante el aumento apreciable de nuestras actividades operativas, cabe señalar que durante dicho período el gasto administrativo del Banco se mantuvo prácticamente estacionario en términos reales.

Estos resultados se han logrado mediante la aplicación de una rigurosa política de austeridad en el gasto y la eficiente utilización de los recursos humanos de la Institución. Debo, una vez más señalar, el abnegado espíritu de servicio e identificación con los problemas del desarrollo latinoamericano de nuestro cuerpo de funcionarios, que ha hecho posible cumplir eficazmente las crecientes tareas que enfrenta el Banco. Hemos asimismo, continuado avanzando en el proceso de refuerzo de nuestro sistema de representaciones en los países prestatarios, tendiente a aprovechar más su capacidad para participar en todo el ciclo operativo de la Institución, mediante una mayor descentralización de funciones. Otro aspecto que merece ser destacado es el progreso alcanzado en la política tendiente a darle cada vez una mayor participación a la mujer dentro de los cuadros profesionales del Banco. Esta participación, que en el año 1970 solo alcanzaba el 7%, representaba, a fines de 1980, un 19% del total.

Conviene anotar que la sustancial reserva acumulada por el Banco hasta ahora con las cantidades pagadas por todos los países prestatarios de la institución, genera recursos por montos que ya son bastante superiores al total de los gastos administrativos del Banco.

Conforme a la recomendación efectuada por el Comité de la Asamblea de Gobernadores y la decisión adoptada posteriormente por el Directorio Ejecutivo del Banco, la Administración ha venido adelantando los trabajos necesarios para establecer un sistema de riesgo cambiario compartido por los prestatarios durante la vida de los préstamos. Se anticipa que el sistema podrá entrar en funcionamiento para los préstamos que se autoricen a partir del 1º de enero del próximo año. Las bases del sistema son las que oportunamente se presentaron al Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Funciones y Políticas. En el segundo semestre del corriente año, se enviará a los países miembros información operacional más detallada acerca del funcionamiento del sistema.

Al terminar estas consideraciones sobre la labor cumplida durante el ejercicio, no podría dejar de hacer referencia al extraordinario esfuerzo realizado en la elaboración del informe sobre el papel del Banco en la América Latina en el decenio de los ochenta, preparado por la Administración y revisado por el Directorio Ejecutivo, que ha sido elevado oportunamente al Comité de la Asamblea de Gobernadores. Lleva este trabajo el propósito de examinar los principales problemas y prioridades de desarrollo de los países

de nuestra región, en conjunción con la acción que deba llevar a cabo el Banco durante los años de la presente década a través de sus funciones y políticas.

El problema de los alimentos y la necesidad de completar y profundizar el proceso de desarrollo social.

Del diagnóstico efectuado acerca de la situación y perspectivas de la América Latina en la década de los ochenta, quisiera destacar algunos aspectos de trascendental importancia en torno de los cuales es posible visualizar el papel que debiera cumplir nuestra institución en apoyo de los esfuerzos de todos sus países miembros.

El primero de esos aspectos es el relativo a los alimentos y su vinculación con el proceso de desarrollo social que se hace imperativo completar y profundizar en esta década. Debemos reiterar, en primer término, que el Banco debe continuar desarrollando, tal como lo dispusieran los señores gobernadores, una política efectiva de apoyo a las grandes mayorías de nuestros pueblos, dirigida a hacer posible que los sectores de población menos favorecidos alcancen un nivel de vida decoroso.

El problema de la pobreza al que estamos aludiendo se está convirtiendo aceleradamente, en América Latina, en un problema intimamente vinculado con el desplazamiento masivo de las poblaciones hacia las ciudades. La pobreza está concentrándose y continuará haciéndolo en el futuro previsible, en los núcleos periféricos de la población urbana. Es menester ir acostumbrándose a esta nueva percepción del fenómeno urbano y de la pobreza. Al hacerlo no se deberá perder de vista, obviamente, la necesidad de continuar atacando el problema de la miseria en el medio rural y de acentuar las acciones tendientes a retener, con empleo productivo y la provisión de los servicios sociales imprescindibles, al mayor número posible de habitantes en dicho medio. Sin embargo, ya no sería realista continuar considerando, como hasta hace poco tiempo, que el desafío social principal para nuestros países consiste en atacar el problema de la pobreza en el medio rural.

Se espera que el proceso de concentración urbana de la región continúe en función no solo de la mayor emigración rural hacia las zonas urbanas, determinada por la falta de oportunidades de ocupación en el agro y la carencia de servicios sociales esenciales, sino en razón de que actualmente la mayoría de nacimientos ocurre en las ciudades, lo cual les imprime su propio impulso de crecimiento. Al mismo tiempo continuará la anexión de los poblados que circundan las ciudades que a la larga caerán dentro de la órbita expansiva de las zonas metropolitanas. En el año 1960, más de la mitad de la población de la región era rural; en la actualidad, casi dos tercios es urbana. Para fines del siglo las tres cuartas partes de los habitantes de América Latina vivirán en las ciudades.

Las tendencias conocidas de continuo crecimiento demográfico y desplazamiento masivo de la población hacia las ciudades tienen un impacto creciente en el aumento de

la fuerza de trabajo. Para visualizar cuantitativamente este aumento sin precedentes de la fuerza de trabajo, basta señalar que, la misma crecerá en un 35% entre 1980 y 1990.

La totalidad de los hombres y mujeres que, en adición a los actuales subocupados y desocupados, estarán reclamando su incorporación a los procesos productivos y sociales está compuesta, como es obvio, por individuos ya nacidos en las décadas precedentes. Por tal motivo, la atenuación que ha venido experimentando el ritmo global de incremento poblacional de la región, no tendrá efecto alguno sobre el fenómeno señalado durante la presente década. A su vez, y quizá esto sea lo más importante, el 90% de este incremento de la fuerza laboral ocurrirá en centros urbanos. Como consecuencia, el desempleo y el subempleo urbanos seguirán siendo uno de los problemas principales de la región.

A fines del decenio de los setenta, los problemas del desempleo en América Latina, con pocas excepciones, ya registraban caracteres agudos, como resultado de que las economías respectivas carecían de capacidad para absorber el número nunca visto de trabajadores que se incorporaban a la fuerza laboral. Se espera que entre 1980 y 1990 habrá en la América Latina cerca de 3.7 millones de trabajadores que ingresarán anualmente en la fuerza laboral.

Las tasas de subutilización de la fuerza laboral llegan hoy a alcanzar en varios países cifras de entre el 30% y el 50%. Habiendo tanta gente sin trabajo, las posibilidades de dar ocupación lucrativa a los millones de nuevos brazos que ingresarán anualmente a la fuerza laboral parecen en verdad problemáticas. Por otro lado, la tasa de participación femenina en la fuerza laboral se encuentra en aumento. Actualmente el ingreso de la mujer al mercado de trabajo se produce a una tasa superior al 3,6% anual, en tanto que la tasa de crecimiento en lo que respecta al sexo masculino es de alrededor del 2,5%. Esto hace necesario visualizar el problema con un enfoque distinto del que se tenía hasta hace pocos años.

El rápido crecimiento de la población y de la urbanización, junto con un conocimiento cada vez mayor de los patrones de consumo de los países más desarrollados, ha provocado un aumento significativo en las expectativas de los individuos, lo que a su vez exacerba las tensiones y las presiones sociales. Es así como el desafío fundamental que se presenta en el campo social en la actualidad es crear oportunidades de empleo para una población urbana que crece rápidamente. Para ello sería indispensable que los servicios educativos se orienten, teniendo en cuenta las realidades del mercado de trabajo, a proporcionar la formación y capacitación que hagan posible la participación creciente de estos núcleos de población en actividades productivas.

A pesar de los múltiples avances logrados durante las décadas de los sesenta y setenta, los problemas sociales se tornarán lamentablemente más complejos durante la década

da que iniciamos, como resultado de la interacción de esas fuerzas, y para enfrentarlos serán necesarias no solo grandes cantidades de recursos financieros sino también la incorporación de recursos gerenciales y organizativos cada vez mayores dentro de los correspondientes marcos institucionales.

No cabe duda que el esfuerzo para lograr la creación y expansión de la base industrial de los países latinoamericanos, particularmente a través de procesos productivos intensivos en el uso de la mano de obra, es uno de los elementos indispensables para enfrentar este problema. Hemos estado y continuaremos, en cumplimiento de las orientaciones de los señores Gobernadores, dando nuestro apoyo a estos esfuerzos, particularmente los encaminados a ampliar la producción de bienes industriales exportables.

Sin embargo, la escasez de producción de alimentos en la mayoría de nuestros países constituye un determinante de la problemática social a que hemos venido aludiendo, y las medidas que se puedan implantar para aumentar dicha producción permitirán asegurar que un amplio sector de la población de nuestros países logre mejores niveles de vida.

Para visualizar cómo la producción alimentaria se inserta en la problemática social, bastaría recordar que para poder proporcionar un aumento en el consumo de alimentos per cápita de los latinoamericanos de solo un 10% durante el presente decenio, se requerirá aumentar en un 45% el suministro de alimentos para la región en su conjunto. La oferta de alimentos en las zonas urbanas tendrá por su parte que ser incrementada durante el decenio en un 60%. Para este propósito sería menester elevar significativamente la productividad agrícola en forma sostenida. Alcanzar tal aumento constituye un desafío que ofrece enormes oportunidades para mejorar el nivel de vida de los productores agrícolas. Lograrlo también en la producción de alimentos es, a su vez, la mayor contribución que puede hacerse a los grupos urbanos de bajos ingresos.

Hay dos aspectos de las actuales políticas alimentarias de los países latinoamericanos que merecen especial consideración. El primero, es el rápido aumento de la demanda de alimentos y otros productos agrícolas derivado de la expansión de los centros urbanos. Debido a la transformación de los patrones de consumo en cuanto a tipos y volúmenes de alimento consumido, los actuales sistemas de comercialización de esta clase de productos, basados en multiplicidad de operadores de pequeña escala, se han visto sometidos a considerable presión. Para mantener los precios de los alimentos para la población urbana a niveles relativamente bajos, ha sido mucho más fácil, en muchas ocasiones, importar productos agrícolas, que pueden obtenerse en el mercado internacional a precios que, con frecuencia, no guardan relación con los verdaderos costos de producción.

El segundo consiste en que el gran número de habitantes rurales que ha abandonado el campo debido a la falta de empleo, ha contribuido a hacer persistente el problema

de la pobreza rural y a aumentar la pobreza en los centros urbanos. Este fenómeno guarda relación con la ausencia de políticas que creen oportunidades económicas para la producción interna de alimentos. De esta forma, parece evidente que el impacto de las políticas seguidas, en muchos casos ha contribuido a acentuar los efectos de ambas tendencias negativas. Es así como se ha alentado el uso de los escasos recursos en divisas de los países para importar alimentos, a la vez que se ha desalentado la producción agrícola nacional.

Es ampliamente reconocido el impacto que el proceso de desarrollo industrial trae aparejado en cuanto al aumento de la demanda de productos agrícolas y, muy especialmente, de alimentos. Más aún, en la medida en que se van alcanzando estadios de mayor integración en el proceso de industrialización, dicha demanda, como lo pone en evidencia el mundo de los países europeos de economías planificadas, hace crecer la dependencia de fuentes de abastecimiento de alimentos, incluyendo, en medida muy significativa, la de productos agrícolas requeridos para el proceso de producción de carnes.

La revisión de las políticas alimentarias y la transformación del sistema de comercialización para basarlo en la producción interna será difícil para muchos países, pero debería producir beneficios múltiples a largo plazo, entre ellos una mayor seguridad alimentaria; un aumento del ingreso y del empleo rural; y vínculos más fuertes entre agricultura e industria. Conseguir estos beneficios debería ser un objetivo fundamental de la planificación agrícola y del sistema alimentario de nuestros países.

América Latina, cuenta, afortunadamente, con los recursos necesarios para aumentar la producción agrícola y de alimentos, para asegurar a la región su autosuficiencia alimentaria. Esto sitúa a la región en una posición más favorable que la prevaleciente en la mayoría de las regiones industrializadas del mundo. Ello es así dado que las fronteras agrícolas de muchos de nuestros países son todavía susceptibles de ser considerablemente ampliadas. Además, la incorporación de tecnologías ya existentes permitiría aumentar en forma extraordinaria en todos los países, la productividad de las explotaciones agrícolas. Sin embargo, es menester reconocer que este panorama de potencial autosuficiencia contrasta con la realidad presente.

La experiencia de los últimos años de la región en su conjunto, evidencia que el volumen de las exportaciones agrícolas ha crecido solo un 28% entre 1970 y 1978, mientras que la importación de productos agrícolas ha crecido a una tasa casi tres veces mayor en el mismo periodo. Esta tendencia desfavorable es aún más acentuada en el intercambio internacional de productos alimentarios. Mientras que las exportaciones de alimentos de la región aumentaron un 38%, las importaciones regionales de alimentos lo hicieron a una tasa cercana al 100%. Este sustancial aumento de las importaciones de productos agrícolas pone en evidencia que la región no ha sido capaz de responder adecuada-

mente a la demanda generada por el crecimiento del ingreso de sus habitantes y de la población urbana.

Todo esto nos permite concluir en la imperiosa necesidad de lograr un aumento muy significativo de la producción agrícola, especialmente de alimentos, para disminuir la creciente dependencia de muchas de las economías de la región de este tipo de importaciones cuyo peso resultará intolerable, pues se adiciona a la necesidad de importar combustibles. Incluso en los casos de países latinoamericanos exportadores netos de alimentos y de productos agrícolas, se hace necesario redoblar los esfuerzos productivos para contribuir a generar recursos externos necesarios para el desarrollo industrial y la modernización de sus economías.

El desafío que la región enfrenta consiste en alcanzar durante la década la autosuficiencia alimentaria. Ello encierra un paralelismo con el desafío planteado por la situación energética al que me referiré a continuación. En el caso de la producción agrícola y de alimentos, sin embargo, la base de recursos existente en la región, el mayor conocimiento y control sobre las tecnologías aplicables y la menor necesidad de insumos de capital, unida a la rápida maduración de la mayoría de los programas de desarrollo agrícola, hacen pensar que dicha meta que propongo pudiera ser realizada durante esta década.

Para ello será indispensable que el creciente reconocimiento de la prioridad e importancia de un rediseño de políticas a nivel de los países se materialice en medidas concretas de acción. Los recursos financieros domésticos y externos necesarios, están en gran medida disponibles si quisiéramos orientarlos de una manera rápida y efectiva para este propósito. El Banco está, por supuesto, dispuesto a brindar su más amplia cooperación a los países latinoamericanos, conjunta e individualmente, para enfrentar este urgente desafío.

La energía: motor y condicionante del desarrollo de América Latina

La energía ha sido uno de los factores de importancia crítica en el proceso de desarrollo de los países industrializados. El acceso restringido a amplias disponibilidades de energía, en especial a los hidrocarburos, a precios declinantes en términos reales desde los umbrales de la posguerra, posibilitó mejoras sustanciales en todas las actividades productivas, que a su vez hicieron posible la rápida configuración de las modernas economías industrializadas. Gran parte del desarrollo tecnológico de las últimas tres décadas se basó en la utilización creciente de los hidrocarburos como fuente energética.

Los países latinoamericanos, al igual que las naciones en desarrollo de otros continentes, emularon las estrategias de crecimiento e industrialización de los países desarrollados e incorporaron a su infraestructura básica, especialmente los sistemas de transporte y sus procesos productivos, tecnologías basadas en el uso intensivo de petróleo. La identidad desarrollo-industrialización se convirtió, de

hecho, en una relación en que el elemento vinculante fue el insumo creciente de energía.

La correlación entre consumo de energía y crecimiento económico fue reconocida con carácter de dogma en todos los planes y programas de desarrollo económico y social formulados por los países latinoamericanos en los últimos tres decenios. Esta dependencia del factor energía es, si se quiere, considerablemente más grande cuanto menor es el estadio de desarrollo relativo de los países.

Fue así como particularmente entre 1960 y 1973, se advirtió un extraordinario crecimiento del consumo de energía comercial tanto en las naciones industrializadas como en los países en desarrollo. Tal expansión reflejó, por encima del aumento de la actividad económica, el aludido impacto de la introducción de tecnologías intensivas en el uso de energía. Durante este periodo, tanto los países desarrollados como en desarrollo carentes de recursos energéticos propios, juzgaron innecesario poner en tela de juicio el modelo de desarrollo del resto de mundo, por cuanto existía hasta entonces la seguridad de abastecimiento de fuentes externas a bajo costo.

Durante el periodo a que nos venimos refiriendo, en los países en desarrollo se registró una expansión del consumo de energía equivalente al 7,5% por año, mientras que en los países desarrollados el crecimiento tuvo un ritmo promedio del 5% anual. Pese a este crecimiento diferencial, la brecha del consumo per cápita de energía entre países desarrollados y en desarrollo persistió. En efecto, en los países desarrollados el insumo anual de energía alcanzó a casi treinta barriles equivalentes de petróleo per cápita, mientras que en las naciones en desarrollo apenas alcanzaba a dos barriles.

En otras palabras, hasta mediados de la década del setenta, los países en desarrollo, y particularmente los latinoamericanos, se industrializaron, urbanizaron e integraron interna y subregionalmente a base de inversiones de infraestructura y producción basadas en un alto consumo de petróleo a precios declinantes.

A partir de 1974 el drástico aumento del precio del petróleo unido al temor del agotamiento de este recurso y a la inseguridad de su abastecimiento, provocaron lo que ha dado en llamarse la "crisis de energía". Los efectos totales y el impacto último en la economía mundial de esta crisis, a pesar del lustro transcurrido desde su inicio, aún no han sido determinados enteramente. La gran incertidumbre derivada de la falta de seguridad en lo que respecta a disponibilidad y precio de los hidrocarburos, ha afectado y continuará afectando en forma muy apreciable las decisiones de gasto e inversión de nuestros países y genera serias inquietudes en cuanto a las posibilidades de seguir avanzando en el proceso de mejoramiento socioeconómico del gran número de países latinoamericanos que confrontan deficiencias de aprovisionamiento doméstico de energía.

Es indudable que estos países deberán continuar aumentando su consumo de energía, incluso a tasas más altas que las experimentadas hasta el presente y superiores a las del mundo industrializado. Entre los factores que influyen en esta previsión se encuentran el índice relativamente incipiente de desarrollo industrial de la mayoría de estos países, y la ineludible necesidad de insumos energéticos requeridos para la mayor producción de alimentos. La sostenida migración rural-urbana y la sustitución de los combustibles tradicionales por energía comercial contribuirán a acentuar el crecimiento de esta demanda.

Debido a la adopción hasta el presente de tecnologías de uso intensivo de petróleo, ha habido en América Latina escasa sustitución entre combustibles. Es por ello que el papel del petróleo en la satisfacción de las necesidades globales energéticas no ha podido ser modificado significativamente hasta ahora. Tampoco es posible visualizar que esta fuerte dependencia pueda ser disminuida dramáticamente en el corto y mediano plazo.

Al final de la década de los setenta el petróleo por sí solo satisfacía más del 90% de las necesidades totales de energía de trece países latinoamericanos, que son a la vez los de menor desarrollo relativo. A nivel de toda la región latinoamericana, el petróleo cubría el 70% del consumo energético total. Esto compara con una dependencia de alrededor de un 50% en el petróleo en el caso de los países desarrollados y de un 45% en promedio de todo el mundo. América Latina, por lo tanto, depende del petróleo más que ninguna otra región del mundo desarrollado o en desarrollo.

Lamentablemente, en los años que van desde el inicio de la crisis de energía hasta el presente, ha sido relativamente poco lo que los países latinoamericanos han logrado materializar como paliativo a esta situación. Tampoco en el mundo industrializado la toma de conciencia respecto de la verdadera magnitud del problema fue instantánea y se tradujo en medidas inmediatas para disminuir el impacto de la crisis sobre sus economías. En muchos países latinoamericanos, por lo menos durante los primeros años de la crisis, se logró amortiguar el impacto de la nueva situación, básicamente a expensas de un mayor y acelerado endeudamiento externo a corto plazo. De esta manera muchos de estos países lograron sostener ritmos de crecimiento económico significativos que implicaron incrementos importantes en su consumo de hidrocarburos importados, sin adoptar los cambios necesarios para ir ajustando sus economías a la nueva situación.

Es innegable que, particularmente en el último año y medio, ha habido un reconocimiento unánime en nuestros países, de la necesidad de adoptar medidas decisivas para hacer frente a la situación. Esto se ha ido traduciendo en una actualización de los precios relativos de los insumos energéticos y en la incorporación de costos revisados de la energía dentro de los parámetros de decisión de nuevas inversiones. Es obvio, sin embargo, que los ajustes en pro-

fundidad que demanda la nueva situación, deberán, en gran medida, ser programados, adoptados y puestos en ejecución a partir de ahora.

Tales ajustes en el caso de América Latina, no podrían efectuarse a expensas de una interrupción del proceso de desarrollo económico y social de los países. Existen sin duda, oportunidades para conservar energía y, sobre todo, para racionalizar el consumo energético aumentando la eficiencia en la utilización de las diferentes fuentes disponibles. Sin embargo, en países en proceso de desarrollo las oportunidades para disminuir los requerimientos globales energéticos por esta vía son de limitado impacto agregado, dado su estado de desarrollo.

La posibilidad de reasignar el transporte de bienes y personas a medios más eficientes desde el punto de vista energético no resulta posible tampoco a corto plazo, dado que tales medios alternativos o no existen o están incapacitados para absorber esta demanda. A mediano plazo, la posibilidad de rediseñar los sistemas de transporte hacia los medios fluviales y el ferrocarril, se ve dificultada por la desfavorable configuración geográfica de muchos de los países y el alto costo y larga gestación de los proyectos de inversión requeridos. Por lo tanto, también se hace difícil contar, a corto y mediano plazo, con un alivio de la situación proveniente de este tipo de medidas.

Para que América Latina haga frente a la situación no existen, por lo tanto, medidas que a corto o mediano plazo no envuelvan el necesario desarrollo de fuentes adicionales de energía tanto tradicionales como no tradicionales.

Afortunadamente, la región en su conjunto cuenta con un potencial muy vasto de recursos energéticos suficiente para asegurarle los requerimientos de su proceso de desarrollo a largo plazo y para permitirle asumir un papel creciente en un mundo cada vez más interdependiente.

Dicha base de recursos está constituida en primer lugar por los hidrocarburos, dado que en particular es evidente hoy que la mayor parte de los recursos recuperables de petróleo de la región están aún por ser cuantificados y puestos en condiciones de ser aprovechados. Las reservas comprobadas actuales de petróleo de América Latina ascienden a 74.000 millones de barriles de los cuales aproximadamente el 90% se encuentran en México y Venezuela. Además de dichos países, cuyos niveles de reservas comprobadas es razonable esperar que aún aumentarán sustancialmente, los nuevos descubrimientos que se vienen realizando en Argentina, Perú, Ecuador y Guatemala, a título de mero ejemplo, ponen en evidencia el justificado potencial de la base petrolera de América Latina.

También en términos de gas natural, la perspectiva de la región en su conjunto es muy favorable, siendo conocida ya la existencia de grandes yacimientos en el extremo sur del continente, en la zona andina y en la cuenca del Caribe. El potencial hasta ahora conocido de producción de hidrocarburos, basado en petróleos muy pesados y esquistos bituminosos es, para completar el cuadro, también de una

potencialidad inmensa, equivalente por lo menos a tres veces el nivel de reservas comprobadas de petróleo convencional.

Igualmente importantes son los recursos aún no aprovechados provenientes de la capacidad hidroeléctrica, de la cual en la actualidad menos de un 10% ha sido puesto en servicio. Este recurso energético renovable es, en base en estimaciones muy conservadoras, equivalente a 50.000 millones de barriles de petróleo. En materia de hidroelectricidad, están todavía por ser encarados los proyectos que corresponden a los dos extremos de la escala de tamaño de aprovechamiento, es decir, los muy grandes aprovechamientos hidroeléctricos que se harán viables en base en interconexiones regionales multinacionales y los muy pequeños aprovechamientos que permitirán habilitar el suministro energético para los centros aislados y el medio rural.

Los recursos carboníferos por su parte, si bien concentrados solamente en unos pocos países, abren perspectivas de alto interés, particularmente como complemento del desarrollo de otras fuentes energéticas. Su importancia cuantitativa supera la de las reservas conocidas de hidrocarburos.

Otras fuentes de energía, incluyendo la geotérmica, la nuclear y la solar, tienen un potencial considerable, particularmente la última, ya que en casi todos los países de la región existen condiciones muy favorables para atender con esta fuente, entre otros, los pequeños sistemas descentralizados en áreas rurales. La utilización de biomasa, finalmente, podría desempeñar una función muy importante mediante la producción de etanol y metanol para sustituir combustibles petrolíferos. Como es ampliamente conocido, uno de los países de la región, Brasil, ha demostrado ya una gran capacidad para impulsar un acelerado proceso de innovación tecnológica que lo coloca en una posición de vanguardia en el mundo en cuanto a la utilización de este recurso para generación de energía.

Con base en esta apreciación del potencial de recursos energéticos de la región es posible concluir que, desde este punto de vista, no sería ilógico proponer en el mediano plazo, es decir, para la presente década, que nuestros países pudieran duplicar sus niveles de producción actuales de energía, particularmente la proveniente de fuentes alternativas al petróleo.

La consecución de tal meta tendría una marcada influencia en aminorar la alta dependencia que muchos de los países de la región tienen de los hidrocarburos importados, y por lo tanto, viabilizaría el desarrollo adecuado a largo plazo de estos países. A la vez, permitiría que los países exportadores de energía pudieran incrementar su participación en la oferta mundial de estos bienes.

No lograr una duplicación de la producción nacional de energía significaría, a no dudarlo, limitar el crecimiento de la mayoría de nuestros países a niveles probablemente incompatibles con la impostergable necesidad de mejora de

las condiciones de vida de sus pueblos, ya que no les sería tampoco posible a tales países sostener un crecimiento equivalente de sus importaciones de petróleo.

El logro de este objetivo entraña un gigantesco esfuerzo técnico y financiero, tanto de origen interno como externo a la región. Las acciones a encarar abarcan simultáneamente, por lo menos los siguientes planos:

- El trazado de estrategias y políticas de desarrollo en las cuales el factor energético sea una de las variables explícitas importantes, reforzando los esquemas de planificación del sector energético e integrándolos en el cuadro de la programación global. Otro aspecto es la puesta en ejecución de medidas encaminadas a racionalizar el consumo de energía, asegurando la mayor eficiencia posible en la utilización de las distintas fuentes disponibles, particularmente en relación con los sistemas de transporte.

- Un esfuerzo concentrado en la identificación y preparación de proyectos de producción de energía, con énfasis inmediato en la iniciación o el completamiento de las tareas de evaluación y cuantificación de los recursos energéticos de que dispone la región, especialmente de los combustibles fósiles, en atención al lento proceso de maduración que tienen tales tareas preparatorias del proceso de explotación de los recursos.

- Una ampliación de la infraestructura tecnológica de la región para permitir adaptar y desarrollar las tecnologías que hagan posible el desarrollo de las fuentes de energía, particularmente de las no convencionales.

La escala de las inversiones que debería realizar la región para alcanzar la meta sugerida de duplicar en el decenio su oferta energética, se sitúa aproximadamente en el orden de los US\$ 300.000 millones. Aún asumiendo que resulte posible reorientar de una manera drástica la asignación de recursos domésticos, públicos y privados, hacia estas inversiones, la magnitud de los requerimientos indica, a todas luces, que la región requerirá de un apoyo sin precedente de fuentes externas, para materializar este propósito.

El Banco reconoce la crucial prioridad que sus países miembros asignan a este sector y está plenamente consciente de su responsabilidad de ofrecer el máximo de cooperación a todos los países latinoamericanos. Los señores Gobernadores han dispuesto que en el presente ciclo operativo 1979-1982, se asigne a esta actividad un 25% de los recursos propios de la institución, lo cual está siendo cumplido.

Nuestro Directorio Ejecutivo ha revisado las políticas operativas de la institución aplicables a su actividad en este sector y en el de la minería, con el objeto de permitir al Banco cooperar con los esfuerzos de sus países en áreas tan cruciales como la exploración de recursos energéticos. Ya se han concretado los primeros programas de este tipo en el área del Caribe y próximamente habrán de concretarse los programas anunciados de exploración de la plataforma continental.

Hemos también avanzado en el apoyo a proyectos innovativos de desarrollo de fuentes no convencionales de energía, y brindado colaboración a los esfuerzos de los países, tendientes a mejorar su planificación y programación energética. Estamos obviamente dispuestos a continuar e intensificar todos estos esfuerzos. La magnitud sin precedentes de la brecha financiera que confronta la región es sin embargo tal, que hace indudable concluir en la imperiosa necesidad de encontrar nuevos mecanismos y modalidades de colaboración internacional que hagan posible a los países latinoamericanos acceder a los caudales de recursos financieros y tecnológicos externos indispensables para afrontar especialmente los proyectos de gran envergadura tanto en el campo de la producción de hidrocarburos y carbón, como en el de las grandes obras hidroeléctricas sin los cuales será imposible alcanzar las metas sugeridas.

Al concluir estas reflexiones sobre el problema energético, creo importante señalar los avances que los países latinoamericanos están logrando a través de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), en la coordinación de programas y políticas nacionales de energía y la cooperación energética recíproca. El Banco, que ha estado en contacto permanente con OLADE, se propone continuar apoyando estos esfuerzos.

Los grandes proyectos de aprovechamiento de recursos naturales, integración física y complementación industrial.

Como se desprende del diagnóstico efectuado de las necesidades energéticas de la región, tiene América Latina la oportunidad y el imperativo de poner en marcha grandes inversiones que hagan posible el aprovechamiento del potencial de recursos naturales existente. Además de dichas grandes obras para la puesta en producción de los recursos de hidrocarburos, hidroeléctricos y de la minería del carbón, hay la posibilidad de desarrollar los otros recursos minerales estratégicos cuyo aprovechamiento no sólo es esencial para las necesidades del desarrollo de América Latina sino también para contribuir a la diversificación de los suministros de los países industrializados.

La mayoría de estos grandes proyectos tienen un común denominador que es necesario resaltar. Su dimensión y alcance trasciende las fronteras geográficas de los países latinoamericanos en que los proyectos se hallan situados. Esta característica hace que su desarrollo y puesta en ejecución envuelva, en mayor o menor medida, la interacción binacional o multinacional latinoamericana, e incluso la actuación concertada de los países a nivel subregional.

América Latina ha avanzado lenta pero firmemente en los últimos años en el desarrollo de mecanismos operativos que han permitido ir concretando empresas de gran envergadura en base multinacional. Ejemplo de ello son, entre otras, las grandes obras hidroeléctricas que se están ejecutando en el Cono Sur, a las que nuestra institución es-

tá íntimamente asociada. La dimensión multinacional de estos proyectos no se limita a los propios países latinoamericanos. Particularmente los proyectos de desarrollo minero y los grandes proyectos industriales básicos hacen posible y requieren la incorporación de capital, tecnologías y equipos de alta complejidad y sofisticación técnica, provenientes de los países industrializados. Es así como la materialización de estas iniciativas envuelve, en mayor o menor medida, el establecimiento de esquemas de cooperación en los que se asocian países latinoamericanos e industrializados.

Entre los proyectos de esta clase merecen una referencia muy particular los correspondientes al sector de la generación y transmisión eléctrica. La nueva situación que confronta el mundo en materia energética y los avances en el desarrollo de las tecnologías que permiten la transmisión del fluido eléctrico a muy alta tensión y a muy larga distancia, hacen posible comenzar a visualizar ya la concreción de aprovechamientos hidroeléctricos destinados a satisfacer las demandas de mercados con los que no se tiene una contigüidad de fronteras geográficas inmediata. La experiencia de Canadá y la Unión Soviética, evidencia la viabilidad técnica y económica de encarar proyectos de esta magnitud que incluyen el transporte de energía a distancias muy considerables. Los costos alternativos energéticos hacen que la rentabilidad financiera de este tipo de emprendimientos resulte crecientemente atractiva. Para hacer posible estos aprovechamientos cuyo potencial desarrollo, por ejemplo, es conocido desde hace años en las grandes cuencas hídricas del norte de América del Sur, sería menester concebir sistemas de interconexión eléctrica regionales que enlacen a Sudamérica a través del Istmo Centroamericano, con México.

Recientes desarrollos en la tecnología para la transmisión de energía por medios submarinos hacen pensar además, en las posibilidades de extender estos sistemas a los países insulares del Caribe.

La interconexión eléctrica en esta escala regional, haría por otra parte posible una paralela integración e interconexión de flujo geográfico inverso, es decir, del norte al sur, de hidrocarburos, particularmente gas, para complementar y equilibrar el suministro energético y abrir también inmensas posibilidades para encarar emprendimientos industriales y agroindustriales.

Es obvio, de la mera enunciación de estas posibilidades que su desarrollo completo envolverá un proceso considerable que no se agotará en las próximas décadas. Sin embargo, parecería indispensable ir sentando ya las bases, que aprovechen la experiencia hasta ahora capitalizada por los países latinoamericanos y por nuestras instituciones regionales, para concretar en los próximos cinco años las etapas iniciales del proceso.

La escala y magnitud de los proyectos a que nos hemos venido refiriendo se sitúa a todas luces en una dimensión muy por encima de las que tienen los mecanismos ac-

tuales, incluido nuestro propio Banco, de captación y transferencia de recursos externos a la región, tanto financieros como técnicos.

La reciente transformación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en un nuevo instrumento de integración que trasciende el plano de los acuerdos comerciales, pone en manos de nuestros países la posibilidad de enfocar grandes obras que permitan continuar avanzando en el proceso de integración física y de complementación industrial de nuestros países. El refuerzo de los esquemas subregionales de integración será, a no dudarlo, un ingrediente indispensable en esta tarea.

Deseo en esta oportunidad reafirmar nuestro decidido apoyo a la integración y la cooperación económica regional y subregional. Debemos continuar, desde el Banco, colaborando intensamente con los países en el refuerzo del CARICOM, del Mercado Común Centroamericano, del Pacto Andino y de los nuevos esquemas como el de la Cuenca del Plata y el de la Región Amazónica.

La movilización de recursos financieros y técnicos.

Los desafíos que América Latina enfrenta al inicio de la década de los ochenta y que condicionan las perspectivas de su progreso económico y social, son de real envergadura. Entre ellos hemos destacado la necesidad de expandir aceleradamente la producción agrícola, de alimentos y de energía. El resolver estas exigencias, sobre todo la última, pone de relieve el papel del ahorro externo como un factor crítico necesario para complementar la capacidad de formación de capitales de la región. Si bien la mayor parte del esfuerzo de desarrollo debe continuar apoyándose en la movilización de los recursos propios de la región, la efectividad de esa empresa depende en medida importante del aporte complementario que ofrece el uso adecuado del ahorro externo.

Las necesidades de recursos financieros foráneos de los países en desarrollo se incrementaron sustancialmente en el transcurso de los años setenta, como resultado del deterioro de los términos del intercambio externo, causado principalmente por el alza extraordinaria de los precios del petróleo, y las crecientes tendencias recesivas de muchos países industrializados. En América Latina, el déficit corriente de la balanza de pagos combinada de la región prácticamente se triplicó de US\$3.900 millones en 1972-1973 a US\$ 11.000 millones por año en el periodo 1974-1977. Hacia fines de la década el déficit externo regional superó los US\$18.000 millones. La significación de este déficit con relación al producto nacional se elevó, de una proporción de alrededor del uno por ciento, en promedio, en la década de los sesenta a 4,4% en 1976-1980.

Las entradas de capitales a mediano y largo plazo constituyeron el principal renglón de financiamiento de esa brecha. La entrada neta de recursos creció aceleradamente en los últimos veinte años al pasar de US\$1.600 millones por año en 1961-1965 a US\$7.600 millones en 1971-1975 y

a más de US\$22.000 millones en los últimos tres años. El aporte de estos recursos, medido con respecto al financiamiento de la formación de capitales en la región, ascendió de una proporción del cinco por ciento en los años sesenta a alrededor del 17% en el último quinquenio.

Paralelamente al aumento de la corriente global de financiamiento externo recibido por la región, se operó una transformación drástica en su composición, especialmente durante la segunda mitad de la década pasada. Un factor determinante del cambio lo constituyó la rápida caída de la participación relativa de los aportes oficiales multilaterales y bilaterales y el incremento sin precedentes de las transferencias financieras por la vía de la banca privada internacional.

La contribución de los recursos de las fuentes oficiales a la entrada neta de financiamiento externo de América Latina disminuyó de una proporción del 60% en promedio, a principios de la década de los sesenta a menos del 15% hacia fines de los años setenta, no obstante que su monto en valores absolutos registró hasta 1976 una tendencia en general ascendente. En particular, los desembolsos netos de los préstamos suministrados por los organismos financieros multilaterales declinaron en este periodo, de un 20% del flujo neto total de financiamiento externo regional en 1961-1965 a poco menos del 10% hacia fines de los años setenta.

Este cambio tan pronunciado de la composición del financiamiento externo recibido por la región, refleja en gran medida el rápido crecimiento experimentado por la actividad crediticia de la banca comercial internacional y como anteriormente se anotó, la fuerte expansión de los déficit de la balanza de pagos de la región. La contribución de los créditos bancarios a la entrada neta total de financiamiento externo de América Latina se expandió a una proporción cercana al 60% hacia fines de la década de los setenta, en comparación con una cifra del orden del 6% en promedio en la década de los sesenta.

Un efecto desfavorable de la transformación experimentada por el financiamiento externo de la región radica en la mayor rigidez y vulnerabilidad que se registra en la balanza de pagos de muchos de nuestros países. Una proporción cada vez más elevada de la capacidad externa de pago es absorbida por el servicio del endeudamiento externo, cuya cancelación es tan perentoria como lo es la asignación de divisas a las importaciones imprescindibles de medicinas, alimentos y combustibles.

El cambio en la composición del financiamiento externo de la región ha traído aparejado un endurecimiento en sus condiciones de interés y plazos, las cuales, si bien reflejan la evolución de los mercados financieros internacionales, no siempre resultan asimilables por todos los países. En particular, en el caso de los países de mediano y menor desarrollo económico relativo, las nuevas condiciones imperantes en los mercados financieros privados internacionales se traducen en un drenaje excesivo de su capacidad ex-

terna de pago. La estructura de los plazos no se compadece tampoco con las necesidades financieras de los programas de inversión para desarrollo que deben emprender los países.

Entre tanto, en los mercados financieros internacionales existe y es previsible que subsista, una liquidez extraordinaria, que naturalmente busca oportunidades de colocación segura y rentable. La fuente principal de origen de estos recursos radica en los excedentes derivados del alza en los precios del petróleo. De acuerdo con todos los antecedentes existentes cabe esperar que esta situación se mantendrá en los años futuros. Hasta ahora, la banca comercial constituyó el principal mecanismo de circulación de esos excedentes, jugando un papel de extraordinaria importancia para el mantenimiento de los niveles de actividad económica, tanto en los países en desarrollo como en los industrializados, y en preservar la estabilidad de la estructura financiera internacional.

La dificultad de la situación actual radica, fundamentalmente, en la limitación que tiene el sistema bancario para continuar expandiendo sus operaciones con los países en desarrollo al ritmo con que lo hizo en el pasado. El capital acumulado por estas instituciones no ha tendido a crecer tan rápidamente como sus colocaciones y la concentración geográfica y los plazos de vencimiento de estas parecen haberse aproximado a los límites de la prudencia. Sin embargo, el papel desempeñado por la banca comercial seguirá siendo vital tanto en el contexto del reciclaje financiero internacional como en el marco del financiamiento externo de la región, especialmente si se considera que las proyecciones del desarrollo económico de los países latinoamericanos encierran necesidades crecientes de financiamiento externo. Por lo tanto, es imprescindible buscar las formas de adecuar la participación del aporte financiero de los bancos, a las necesidades del desarrollo regional.

Es en este orden de ideas, donde se hace evidente la necesidad de adoptar esquemas innovadores que permitan canalizar recursos adicionales hacia América Latina, ya sea que éstos provengan de los mercados financieros internacionales o que constituyan transferencias directas de parte de los países con superávit. A no dudarlo, tal afluencia de recursos debería orientarse en medida creciente al financiamiento de proyectos y programas específicos de inversión, disminuyendo así el financiamiento general e indiscriminado de déficit de la balanza de pagos. Ello permitiría brindar a las fuentes financieras externas las condiciones de seguridad y rentabilidad que buscan, sobre la base de la mayor capacidad productiva establecida mediante la contribución del ahorro externo canalizado hacia proyectos específicos.

El aprovechamiento de las oportunidades de inversión existentes en América Latina ofrece una vía económica eficaz para la asignación de una parte importante de los actuales excedentes financieros mundiales, con beneficios significativos para todas las partes interesadas.

Los países con superávit externo, así como las instituciones financieras intermediarias, contarían con un respaldo adecuado para sus inversiones, en razón de la rentabilidad potencial que ofrece esta región sobre la base de su rica dotación de recursos humanos y naturales y de su probada capacidad de crecimiento.

Los países industrializados incrementarían sus exportaciones de bienes de capital a la América Latina, constituyendo este un mecanismo de reactivación industrial y de estímulo al futuro crecimiento económico de estos países. Y los países latinoamericanos estarían en condiciones de acelerar su crecimiento económico por sobre los límites permitidos por sus propios recursos internos.

Papel del Banco en la presente década.

Al comienzo de esta exposición hice referencia al estudio que en cumplimiento del mandato recibido de los señores Gobernadores, el Banco preparó y ha sometido a su consideración, abarcando el diagnóstico de la problemática actual latinoamericana y su proyección en el decenio que iniciamos.

Mediante el mismo, se procura presentar, a la vez que un resumen de los principales problemas, una visión de las oportunidades de acción en los sectores prioritarios para el desarrollo de nuestros países. La conclusión principal que se desprende de este esfuerzo analítico es que en el curso de los años ochenta será indispensable lograr una movilización sin precedentes de recursos externos. Las actividades de las instituciones financieras que operan en la región, como el Banco, deberá concebirse en un marco de dimensión concordante con la magnitud financiera y técnica de tal esfuerzo.

Resulta en verdad inocultable que la escala, sobre todo financiera, de las instituciones multilaterales de financiamiento, pese a su vigoroso crecimiento relativo de los últimos diez años, ha quedado empequeñecida en relación con los órdenes de magnitud resultantes de la situación posterior a la crisis de la energía. Esta pérdida de escala puede apreciarse tal vez dramáticamente si consideramos, por ejemplo, que el tamaño financiero de una institución como el Fondo Monetario Internacional, es hoy semejante al monto total de recursos financieros que se generan en un solo año en algunos de los países principales exportadores de petróleo. Igualmente importante es el hecho, en particular en nuestra región, de que los mecanismos bilaterales públicos de financiamiento han venido reduciendo en términos absolutos, sus niveles de actividad financiera.

Las necesidades de los países latinoamericanos a su vez, han experimentado profundos cambios entre los que cuenta por su significación, el avance logrado en algunos países en cuanto a asegurar niveles de generación de recursos propios suficientes para cubrir sus necesidades inmediatas de desarrollo y aún generar excedentes. Lamentablemente, también se han agudizado situaciones de carencia de recursos por parte de un buen número de nuestros países.

En todos los países, aun si no fueran requeridos aportes financieros externos netos significativos, subsiste sin embargo, la necesidad de encarar acciones y programas que demandan aportes tecnológicos, y de preparación y refuerzo institucional que reclaman, para su concreción, la incorporación de recursos provenientes de entidades de los países del mundo industrializado y de otros países de la propia región.

Es por ello que resulta imprescindible en los años por venir, visualizar para nuestra institución un papel de colaboración, apoyo e interacción con todos y cada uno de sus países miembros, que tenga la amplitud de espectro y la flexibilidad para permitir poner al servicio de las necesidades de todos los países latinoamericanos la capacidad que tenemos de proporcionar recursos en forma directa; de movilizar la provisión de recursos adicionales a los nuestros y asimismo, y muy especialmente, de brindar una gama de servicios técnicos necesarios en materia de programación, identificación, preparación y ejecución de las inversiones requeridas para hacer posible el continuo proceso de desarrollo.

Como tuviera oportunidad de manifestar a los señores Gobernadores en ocasión de la anterior reunión de esta Asamblea, los desafíos que tenemos por delante —precisados y ratificados con base en los estudios que hemos completado ahora— hacen que, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los países, así como también los intereses y problemas que los unen, se requiera hoy más que nunca, un Banco decididamente lanzado a desempeñar las siguientes funciones:

- La continuación de las actividades tradicionales orientadas hacia el financiamiento de proyectos específicos de desarrollo, en las que la participación del Banco será, sin duda, proporcionalmente mayor en los proyectos de países de menor desarrollo relativo. Dentro de estas líneas tradicionales de actividad del Banco, la continuación del suministro de recursos en términos concesionales, constituirá un factor determinante para posibilitar, particularmente a los países de menor desarrollo, la materialización del compromiso que en ese sentido han asumido todos los países del Banco, de procurar reducir las disparidades en las condiciones sociales y económicas de la región.

- La incorporación de nuevas modalidades operativas que, sin salirse totalmente de los marcos tradicionales, permitan ampliar la efectividad del apoyo del Banco en ciertos sectores y países. En este sentido es de destacar que estamos trabajando activamente en las primeras operaciones de préstamo sectorial. A través de estas operaciones se hace posible abarcar en forma simultánea y ordenada una serie de acciones para producir un impacto significativo en un sector determinado de la economía. Los primeros préstamos sectoriales propuestos están dirigidos al campo agrícola, que es uno de los sectores de mayor prioridad para nuestros países. Contemplamos, con base en la experiencia que se vaya ganando en esta nueva modalidad

operativa, poder dar apoyo a acciones concertadas de los países para encarar problemas de otros sectores prioritarios, como por ejemplo el energético.

- La continuación y ampliación de las actividades no tradicionales de movilización de recursos abarcando, entre otras, el establecimiento de mecanismos o *modus operandi* para identificar, preparar y evaluar proyectos que pudieran recibir de la banca internacional mercantil y de inversión, recursos bajo la forma de préstamos consorciados y, cuando fuera conveniente, inversiones de capital de riesgo.

Estimo, en relación con esta última actividad, que ha llegado el momento de darle al Banco una nueva dimensión, consistente en volcar al servicio de los países, su capacidad y experiencia para evaluar proyectos específicos de inversión que pudieran atraer, por su rentabilidad, recursos adicionales existentes en los mercados financieros internacionales. El Banco podría colaborar con los países en la presentación de los proyectos así evaluados a las fuentes de capital e inversión, participando en el propio financiamiento en forma subsidiaria y acompañando al proyecto en todo su proceso. La próxima consideración por parte del Directorio Ejecutivo de las medidas que podrían ser aconsejable adoptar con vistas al cumplimiento del mandato dado por los señores Gobernadores, de estudiar las alternativas más adecuadas para movilizar recursos externos para los proyectos de energía y minerales, dará una oportunidad para impulsar acciones innovadoras.

Es menester destacar, que al llevar adelante nuestras operaciones, continuaremos como en el pasado aprovechando al máximo las oportunidades que se brindan de coordinar y aunar esfuerzos con otras instituciones financieras que proporcionan recursos a nuestros países, en particular con el Banco Mundial, a través del financiamiento conjunto de proyectos y programas, y con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), la Comunidad Económica Europea (CEE) y el Fondo Especial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con quienes tenemos entendimientos en virtud de los cuales podemos, además de cofinanciar proyectos, encargarnos de la evaluación y administración de operaciones que financien dichas entidades exclusivamente con sus recursos. Al propio tiempo continuaremos colaborando, como hasta el presente, con los organismos especializados subregionales latinoamericanos como el Banco Centroamericano para la Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Latinoamericano de Financiamiento de Exportaciones (BLADEX), y el recientemente creado Fondo de la Cuenca del Plata.

Parece necesario destacar que el enriquecimiento y ampliación del ámbito de acción de una institución multilateral como el Banco, producirá una serie de beneficios de carácter recíproco extensivos a la totalidad de sus países miembros. Esto es así en razón no solo de que el estímulo a

los procesos de inversión en América Latina creará y acrecentará las oportunidades para la incorporación de bienes y servicios provenientes de los países industrializados miembros, sino asimismo, dado que el quehacer mismo de la institución crea y tiene la potencialidad de ampliar un clima y las condiciones para hacer todavía más fructífera en otros campos, la cooperación entre los diversos países e instituciones de la familia del BID.

La contribución que pueda efectuarse para facilitar la continuación del proceso de avance económico y social de América Latina, constituye también una contribución al propio crecimiento de los países industrializados miembros del Banco, particularmente en términos de una coyuntura de la economía internacional plagada de incertidumbre en cuanto al avance general de la actividad económica.

Señores Gobernadores, al pasar revista a los ingentes problemas que enfrentamos en la década presente y a las tareas que corresponde realizar a nuestra institución en apoyo de los esfuerzos de todos los países de la región para lograr sus metas de desarrollo, quisiera en primer término reiterar mi firme convicción en la capacidad creadora de nuestros pueblos.

Esa perenne vitalidad y espíritu innovador demostrados a través de los siglos, habrá sin duda de concebir y poner en marcha las transformaciones indispensables en el esce-

nario económico y social de nuestros países para resolver, con un mayor grado de equidad, los desafíos del crecimiento de América Latina en un mundo cada vez más interdependiente.

El esfuerzo de los países latinoamericanos requiere, particularmente hoy, la comprensión y el respaldo de los países industrializados cuya cooperación financiera y técnica es un elemento indispensable de complementación para sustentar las bases de un entendimiento estable y mutuamente beneficioso.

Es por ello que, pese a las estrecheces que plantea la actual coyuntura financiera internacional, creo que será posible, con base en un esfuerzo recíproco de parte de todos nuestros países, adoptar los reajustes necesarios en el campo de la asistencia internacional, que hagan posible revertir el acumulador de fuerzas desequilibradas que pareciera querer desbordarse y alterar en forma impredecible el curso de la civilización actual.

Ha sido esta convicción y el sentido de reto que envuelve para mí continuar al frente del Banco, lo que ha hecho particularmente honroso el haber recibido de los países miembros la ratificación de mi mandato. Llevan estas palabras finales mi profundo reconocimiento por esa prueba de confianza, la que me anima a proseguir cumpliendo mis gestiones con renovada voluntad de servicio y fe en el futuro de nuestra región.



Resulta un gran honor para mí el tener esta magnífica oportunidad de hacer algunos planteamientos ante la Vigésima Segunda Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Cada vez más se reconoce la importancia de este foro que reúne anualmente a distinguidas personalidades no sólo de América Latina y el Caribe, de los Estados Unidos y del Canadá sino ahora, también de Europa, Asia y Africa. En esta ocasión nos reunimos en Madrid, la bella capital de España, y nuestra presencia aquí, como huéspedes de este gran país, subraya la profundidad y permanencia de los vínculos históricos de ese extraordinario conglomerado humano, cultural, económico y político que se llama Iberoamérica.

En nombre del Presidente de Colombia, doctor Julio César Turbay Ayala, quiero dar el más respetuoso y cordial saludo a su Majestad el rey de España, don Juan Carlos de Borbón y decirle cuán grato es para nosotros el venir a su país y fortalecer, aún más, nuestras relaciones con España. Sus palabras del día de ayer confirman ante la opinión del mundo sus dotes de estadista y de demócrata.

Deseo también felicitar al señor don Juan Antonio García Diez, Ministro de Economía y Comercio, por su merecida elección como Presidente de esta Asamblea. Estoy seguro de que bajo su inteligente y experimentada dirección el éxito acompañará nuestras deliberaciones.

La magnífica hospitalidad de que ya hemos disfrutado merece especial mención pues ella no solo confirma los admirables valores españoles sino que refleja la excelente organización que han dado a este evento tanto el BID como las autoridades locales.

Objetivos

A continuación me referiré a tres aspectos principales que considero son, afortunadamente, los temas inescapables en este tipo de reuniones. Trataré en primer lugar, sobre la situación y perspectiva internacional. Luego analizaré el caso específico de la coyuntura económica colombiana dentro del contexto de la economía mundial. Por último, pero no por ello menos importante, cubriré aspectos relacionados directamente con el Banco Interamericano de Desarrollo y con su papel en el financiamiento del desarrollo de América Latina. Como fácilmente se podrá apreciar existen estrechas interdependencias entre cada uno de estos tres temas.

La situación económica internacional

Como todos los aquí presentes lo saben, la situación económica internacional difícilmente podría ser más preocupante. Por lo general, las economías más avanzadas continúan registrando muy lentas tasas de crecimiento, acom-

pañadas por altas tasas de inflación y de desempleo. Sus déficit de balanza de pagos, su inestabilidad cambiaria y sus elevadas tasas de interés se traducen en grave perjuicio para las economías en proceso de desarrollo, que ven limitados sus mercados de exportación y restringidas sus posibilidades de crecer más rápido, de controlar su inflación y hacer más equitativo todo el proceso de desarrollo.

La anterior situación lleva ya varios años y todo parece indicar que no se corregirá rápidamente. Como bien lo señala el último Informe Anual del Banco Interamericano, el crecimiento de las economías de los países miembros de la OECD, que ya venía declinando, bajó, de un promedio de 3.3% en 1979, a un 1% en 1980. Y para 1981 y 1982 no se espera una recuperación apreciable. Por el contrario, economías tan poderosas como la de Alemania y la de Gran Bretaña probablemente sufrirán un estancamiento en su crecimiento.

El panorama y la perspectiva mundial muestran entonces un cuadro general de recesión, de inflación, de desempleo y de desequilibrio en las balanzas de pagos. Tan grave situación inevitablemente afectará en forma negativa a las economías de menor desarrollo relativo dentro de las cuales se encuentra mi país. Lamentablemente, en nuestro caso particular, este cuadro coincide con otro proceso de ajuste cual es el correspondiente al ciclo descendente de los precios del café en los mercados internacionales. Veamos por qué.

Situación de la economía colombiana.

Desde mediados de 1975 Colombia derivó grandes beneficios de la llamada bonanza cafetera y logró elevar su ritmo de crecimiento a niveles muy satisfactorios durante el período 1976-1978. Pero, a partir del año pasado, hemos tenido que ajustar nuestra economía a una nueva realidad y hemos visto disminuida nuestra tasa de crecimiento al 4.0% en 1980.

Encontramos ahora que la recesión de carácter general que vive el mundo se nos presenta simultáneamente con la rápida caída de los precios internacionales del café. Este doble desafío nos ha llevado a diseñar y a ejecutar una política económica que, a su turno, tiene un doble propósito. De una parte mantener un ritmo satisfactorio de crecimiento, y de otra, reducir la presión inflacionaria. En síntesis buscamos el crecimiento y la estabilidad. Nos damos cuenta que no podemos aceptar políticas o soluciones extremas entre las cuales la inflación se corrige con el estancamiento y el desempleo se elimina con la inflación. Ni lo uno ni lo otro. Hemos escogido un camino intermedio y

* Discurso pronunciado en la tercera sesión plenaria.

los resultados nos confirman que hemos decidido correctamente.

En el frente de la reactivación de la economía, el principal instrumento anticíclico es el denominado Plan de Integración Nacional, PIN, que ya pronto entrará en su tercer año de ejecución. Este Plan reúne características muy especiales entre las cuales se destaca su premisa básica de que, por lo general, el subdesarrollo no es tanto un problema que se origina en la escasez de recursos como en la falta de adecuadas políticas y en la aplicación de diagnósticos equivocados. El Plan contempla, de otra parte, una reactivación de la inversión pública, lo cual ya ha venido cumpliendo a través de una rigurosa selección de proyectos localizados tanto dentro de la infraestructura económica como en la social.

En cuanto al frente de estabilización hemos venido llevando a cabo un programa integrado de medidas monetarias, fiscales y cambiarias, conducentes, todas ellas, a frenar la presión inflacionaria y a darle al sector real de la economía las condiciones propicias generales que este necesita para crecer más rápidamente. Ya el año pasado nuestro índice de inflación fué inferior al de 1979, y para el presente año creemos que podremos mantener esa tendencia obteniendo, al mismo tiempo, un más rápido crecimiento. Obviamente esto no será fácil. Como ya lo dije antes, enfrentamos el doble desafío de un ajuste con toda la economía internacional, de una parte, y de otra, un segundo ajuste en el componente cafetero de esa perspectiva.

Afortunadamente frente a tales circunstancias el país cuenta con razonables márgenes de seguridad y con atractivas oportunidades de desarrollo. Debe recordarse, por ejemplo, que nuestro país ha logrado diversificar sus exportaciones, va a duplicar su oferta de energía hidroeléctrica dentro de seis años, ha duplicado entre 1978 y 1980 su gasto público en salud y en educación, ha atendido sin ningún problema sus requerimientos de combustible importado, y cuenta hoy con más de US\$ 5.000 millones en reservas internacionales.

El caso del endeudamiento externo merece especial atención. Aunque el país ha venido utilizando el financiamiento externo en forma creciente durante el periodo 1978-1980 el total de la deuda externa del sector público y del sector privado, menos de US\$ 5.000 millones, tan solo representa el 13% de nuestro Producto Interno Bruto, y su servicio —intereses y amortización— apenas si llega al 11% de nuestros ingresos por exportación de bienes y servicios. Además, este endeudamiento tiene un plazo promedio de vencimiento de trece años y un interés promedio de tan solo el 8%.

Aunque esta situación en el sector externo está variando rápidamente ella constituye, en este momento, un valioso apoyo a la política de crecimiento y de estabilidad que ha adoptado el gobierno nacional. De no haber sido por las prudentes medidas tomadas cuando se inició la bonanza cafetera en 1975 otra muy distinta habría sido la

trayectoria del país durante los últimos tres años. Afortunadamente se ha contado con una situación de balanza de pagos que nos ha permitido manejar el ajuste externo sin graves crisis cambiarias.

Tenemos, en síntesis un país que se desarrolla y crece; que aprovecha y amplía sus oportunidades de progreso social y que, todo el tiempo, mantiene la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria dentro del marco de su tradición democrática. Colombia tiene fe en sus instituciones democráticas y sabe que sólo a través de ellas podrá alcanzar su mejor destino. Con esta convicción, que comparten plenamente el pueblo y el gobierno, nos mantendremos vigilantes frente a minoritarios y aislados movimientos extremistas, que desde dentro y fuera del país, tienen la vana pretensión de ganar adeptos cambiando la libertad y el progreso —dentro del orden constitucional— por la dictadura y la hegemonía que son el resultado inevitable de la violencia.

Las actividades del BID y sus relaciones con Colombia

El informe del señor presidente del Banco, don Antonio Ortiz Mena, a esta asamblea, contiene un valioso análisis de la situación de la economía mundial, y en particular de los países de América Latina y el Caribe miembros del Banco, así como de la participación de la institución en su desarrollo económico y social. Su informe refleja qué tan extendidas, y graves en algunos casos, son las consecuencias para los países de América Latina y el Caribe del profundo proceso de ajuste por el cual atraviesa la economía mundial, seguramente el más severo en los últimos treinta años.

El personal del Banco ha preparado dos importantes estudios, uno sobre el papel del Banco en América Latina y el Caribe en el decenio de los años ochenta, y otro sobre las necesidades de inversión en el sector energético. Estos dos trabajos son de especial actualidad debido a las cambiantes circunstancias en que tendrá que funcionar el Banco en los próximos años, y porque el financiamiento del sector energético es también de alta prioridad para los países miembros del Banco. Valga aquí la oportunidad para felicitar a las directivas del Banco y a su personal por la excelente calidad de estos importantes informes.

Con relación a los planteamientos que se hacen en ellos, es preciso mencionar la advertencia hecha por el señor presidente del Banco, de que esta institución no podrá seguir cumpliendo su importante función a menos de que disponga de los medios necesarios para hacerlo. La Quinta Reposición de Recursos, ya en ejecución, aún está pendiente de decisiones para que el Banco pueda contar con la totalidad del aumento a su capital, acordado entre los representantes de todos los países miembros. Además, el Banco tampoco ha podido obtener la totalidad de los préstamos programados debido a que las condiciones de los mercados de capital en los últimos meses han sido especialmente difíciles por las elevadas tasas de interés y por las regulaciones en algunos países. Las necesidades de financiamien-

to por parte del Banco se hacen más apremiantes por la concentración de un número de proyectos en el sector energético, cuya ejecución demandaría una alta proporción de los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo.

Es imperativo, por lo tanto, que se sigan estudiando en el Directorio Ejecutivo y consultando con los países, alternativas para conseguir los recursos que necesita la institución a fin de que su función como banco de fomento e intermediario financiero no se debilite en términos de la creciente capacidad de inversión y de absorción de ahorro de la región.

Nos complace mucho que tanto el monto de los préstamos aprobados como los fondos desembolsados hayan superado en 1980 las cantidades de los años anteriores. Estos logros son aún más encomiables si se tiene en cuenta que el Banco ya está cumpliendo con la meta propuesta por los gobernadores para atender especialmente las necesidades de financiamiento para proyectos y programas que benefician directamente a los habitantes de menores ingresos.

En 1980 el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó 64 proyectos por valor de US\$ 2.309 millones. En ese año los desembolsos de la institución fueron de US\$ 1.432 millones. Colombia recibió seis préstamos por un total de US\$ 195 millones de los cuales el 70% se destina a cubrir necesidades de financiamiento del sector energético y el resto se asignó a proyectos de desarrollo social y para mejorar los transportes. Esa cantidad representa 8.4% del total aprobado por el BID, con lo cual el país se sitúa en cuarto lugar después de Brasil, Argentina y México, que fueron los principales prestatarios del Banco el año pasa-

do. Esperamos que en el futuro el BID siga participando de manera creciente en el financiamiento de nuestro desarrollo.

En las excelentes relaciones que siempre han existido entre Colombia y el BID me es grato reconocer, con especial aprecio, la contribución de nuestra actual representación conjunta con el Perú en el Directorio Ejecutivo. Nos sentimos muy complacidos de saber que el doctor César Atala ocupa la silla principal en el Directorio. El es un hombre inteligente, serio, y de profunda experiencia en los asuntos que le toca manejar. Por eso sabemos que cumplirá una brillante tarea.

Señor don Antonio Ortiz Mena, en nombre del gobierno de Colombia, y en el mío propio, lo felicito por la forma como se fortalece y acredita el Banco Interamericano de Desarrollo bajo su experta dirección. Quiero también agradecer a usted, al Directorio Ejecutivo y al personal de la institución por el apoyo que brindan a los programas de desarrollo de Colombia.

No podría terminar estas breves palabras sin hacer referencia explícita al entusiasmo con que Colombia espera cumplir el honor que se le confirió hace cuatro años cuando se escogió a Cartagena como sede de la Vigésima Tercera Asamblea Anual de 1982. La visión y el buen criterio de nuestro ministro de Hacienda de entonces, hoy Embajador ante España, doctor Abdón Espinosa Valderrama, quedarán confirmados dentro de un año. La semana pasada pude comprobar personalmente el avanzado progreso del nuevo Centro Internacional de Convenciones que será inaugurado con ocasión de la próxima asamblea. Mi gobierno, y el país como un todo, agradecen el honor que significará el tenerlos a ustedes como huéspedes de Colombia en nuestra incomparable Cartagena de Indias.

